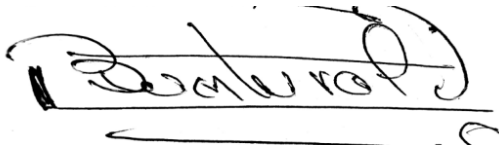


## PROPOSICIÓN MODIFICATIVA

Modifíquese el artículo 2° del Proyecto de Ley N° 172 de 2018 C, “por medio de la cual se incentiva la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad a la educación superior, y se modifican los artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992”, el cual quedara así:

**Artículo 2°.** Actualización educativa. El Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo establecido en el marco de la Convención de Derechos de las Personas con discapacidad, tendrá el deber de implementar una política pública incluyente y eficiente que atienda las necesidades reales de esta población, así como generar un acceso oportuno, permanente y de calidad, desde la educación inicial hasta la Universidad, tanto en educación formal, como no formal.

Parágrafo: El Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE, dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente ley, realizara un censo anual que determine el número real de personas con discapacidad en el territorio nacional, para que con base en esta información, el Ministerio de Educación Nacional ajuste las políticas a las necesidades de esta población.



**BUENAVENTURA LEÓN LEÓN**  
Representante a la Cámara

## ARGUMENTOS DE LA PROPOSICIÓN

Se considera que lo más práctico sería implementar una política pública incluyente y eficiente para la población con discapacidad, que más allá de la normatividad conceptual, lo que genere es un acceso oportuno, permanente y de calidad.

Lo que se debe hacer anualmente, es un censo que determine el número de personas con discapacidad en el territorio nacional, para así ajustar las políticas a las necesidades de esta población.

Lo anterior, teniendo en cuenta que según el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad – RLCPD:

- A corte de 30 de septiembre de 2019 hay un total de 1'521.114 personas registradas.
- Y según el DANE para el 2015, se contabilizaban 3'051.217 de personas con discapacidad, lo que equivale al 6,3% del total de la población.

Esto permite concluir que, las decisiones políticas y presupuestales tomadas con base en las cifras del Registro (RLCPD), están dejando por fuera a una parte importante de esta población, que requiere estrategias y acciones acordes con la realidad, debido a que el registro contiene apenas un 50% del total de personas con discapacidad.